

A PROPÓSITO

Sobre lo que ordena el Estatuto Anticorrupción

Según las normas vigentes anticorrupción, quienes hayan financiado campañas políticas tiene una inhabilidad para contratar con el Estado. El numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 señala que: "Las personas que hayan financiado campañas po-

líticas a la Presidencia de la República, a las gobernaciones o a las alcaldías con aportes superiores al dos por ciento (2.5%) de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral, quienes no

podrán celebrar contratos con las entidades públicas, incluso descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato. La inhabilidad se extenderá por todo el período para el cual el candidato fue elegido.



CORRUPTOS SE ADUEÑAN DE CONTRATACIÓN EN REGIONES

Análisis a la contratación realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros revela riesgos en que están los recursos del Estado por concursos millonarios con único oferente.

Red Medios Colprensa y Unidad Investigativa

De 1122 municipios de Colombia, solo cinco muestran un índice que se considera sano en la contratación pública: que en promedio reciban más de diez oferentes cuando abren un proceso de ese tipo. Así lo concluye la investigación 'Análisis de la contratación estatal 2014', realizada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

El dato es una nueva y clara alerta sobre las posibilidades de corrupción o desdoro administrativo que atentan contra los recursos del Estado.

El análisis hecho por la Sociedad, en cabeza de su presidenta, Diana María Espinosa Bula, es que ese fenómeno puede explicarse en que la mayoría de las licitaciones que abren las gobernaciones y alcaldías se hace con pliegos tan complicados, dirigidos o, incluso, amañados, que solo una o dos firmas pueden participar.

El estudio, dirigido por el ingeniero Jesús Rodrigo Fernández, incluyó las tres modalidades de contratación posible por los entes territoriales: licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, teniendo en cuenta los registros de cierre de las licitaciones y sin incluir a Bogotá.

La cantidad de dinero que refleja el estudio es significativa, pues el año pasado alcanzó los \$15 billones, divididos en \$9,4 billones contratados por municipios y \$5,6 billones por departamentos. La mayoría de recursos fueron adjudicados por licitación pública (\$7,2 billones de municipios y \$4,9 billones de gobernaciones), lejos de lo que se entregó por selección abreviada (\$1,7 billones en municipios y \$0,4 billones en gobernaciones) y por concurso de méritos (\$0,5 billones en municipios y \$0,3 billones en gobernaciones).

Algunas de las cifras generales que demuestran la escasa participación de oferentes para el reparto de los



recursos estatales son estas: cuando los municipios abrieron licitaciones públicas en 2014, solo cinco recibieron en promedio más de diez oferentes (Medellín, Pasto, Popayán, Manizales y Pereira), contra 1106 en los que en promedio se presentaron tres o menos propuestas. Cuando se hicieron procesos de selección abreviada, solo en Popayán hubo más de seis oferentes en promedio, mientras 1106 municipios se mantenían en la escasa cifra de tres o menos. Y cuando la opción fue concurso de méritos, Barranquilla mostró el mejor promedio, aunque apenas superando los cinco oferentes, contra 1116 localidades en la franja de tres o menos.

La tendencia es la misma cuando se analizan las cifras de los departa-

tamentos. Antioquia, Caldas, Nariño y Risaralda muestran promedios que tranquilizan (por tener los más de diez oferentes promedio deseados), pero entre 24 y 29 departamentos apenas recibieron tres o menos oferentes a la hora de contratar.

La presidenta de la SCI cree que tras conocer estos resultados el Gobierno debe trazarse como objetivo un ajuste reglamentario para garantizar la transparencia en la adjudicación de los recursos, aunque advierte que el problema no está tanto en las leyes vigentes, sino en la gente que las aplica y que termina encontrando esquinces, especialmente en la elaboración de los pliegos.

"Se trata de eso, de la construcción de pliegos que terminan dirigidos para que participe una sola firma o dos y del uso de otros recursos, como cuando se hace selección abreviada, para la que se cumple el requisito de que haya multitud de empresas que dicen estar interesadas en participar (a veces hasta 60, entre las que la ley pide escoger una decena por una rifa), pero al final solo uno o dos de los elegidos entregan papeles; la explicación tiene que ser que ese listado inicial se confeccionó por bases de datos manejadas por terceros, con firmas inexistentes, de partes lejanas del país o, incluso, que son sumadas al proceso sin que lo sepan".



Infraestructura. Solo en Cali se otorgaron obras por licitación pública por \$196.752 millones en el año 2014.

La ingeniera Espinosa Bula dice que el principio mal entendido y mal manejado de la autonomía territorial está generando una situación muy grave en la contratación pública. "No de otra manera se explica que con las mismas normas, haya sitios en que todo opera bien. Ahí está el caso de Manizales, en donde el promedio de licitantes es de 78 y sube a más de cien si solo miramos obras civiles, o en Nariño, donde el promedio es 48".

Cita el principio de autonomía porque la Sociedad de Ingenieros cree que la solución puede estar en tomar más acciones desde el Gobierno Nacional, como obligar a usar pliegos unificados cuando se entregan recursos para obras similares o plantear la creación de un ministerio de infraestructura, con entidades descentralizadas a través de las cuales se gestione buena parte de los recursos.

Resultados de la CCI

El fenómeno lo alerta también la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Su presidente Juan Martín Caicedo Ferrer lo dice claro: "Si bien es cierto que los tentáculos de la corrupción parecen ensañarse por estos días con la Rama Judicial, sus alcances se perciben de igual manera al revisar la contratación de obra pública en las regiones. Para comprobarlo, solo hace falta dar un vistazo a las conclusiones del Observatorio de Contratación de la Cámara (el estudio arriba señalado), según las cuales un 65% de los procesos licitatorios abiertos en los municipios del país durante 2014 terminaron favoreciendo una única oferta. En Bogotá, el 58% de los procesos adelantados por las alcaldías locales terminaron dándole luz verde a una sola propuesta".

Según Caicedo esas cifras reflejan "un sistemático proceder de algunas entidades territoriales, que se han dedicado a confeccionar las condiciones de los contratos a la medida de intereses particulares. Esta es una mafia que se enquistó en el país".

El dirigente asegura que la única manera de frenar ese flagelo es implementando pliegos 'Tipo', un mecanismo que unifique las reglas del juego a la hora de contratar.

En el fondo de todo, coinciden la ingeniera Espinosa y Caicedo Ferrer, está la connivencia entre contratación y política, que genera el círculo vicioso de particulares que patrocinan costosas campañas políticas, con la promesa del candidato de que una vez elegido retribuirá ese apoyo a través de contratos públicos.

Estado estudia la situación

El peso de los resultados encontrados por los estudios de la Sociedad de Ingenieros y de la Cámara de Infraestructura aún no se traduce en acciones de parte del Gobierno o de entidades de control. Aunque hay señales de que han acusado la alarma y que estudian maneras de controlar las que a todas luces son irregularidades en el sistema de contratación.

La Presidencia de la República recibió las investigaciones, pero el secretario de Transparencia, Camilo Enciso, se limitó a decir que: "Celebremos la contribución de ambos estudios a la comprensión de los desafíos y riesgos de la contratación pública. Estudiaremos con detalle sus conclusiones y recomendaciones en una mesa de trabajo con Colombia Compra Eficiente".

Enciso realizó un llamado para multiplicar aportes de este tipo, que considera útiles para mejorar la política pública de transparencia. "Necesitamos respuestas estructurales para problemas estructurales. Las buscaremos sin descanso".

En la misma línea, la Contraloría General de la República se abstuvo de hacer un "pronunciamiento de fondo", pues de manera oficial explicó que conoce los informes y tiene la intención de "utilizarlos como insumo para hacer un diagnóstico sobre el tema y una propuesta concreta de parte de la entidad".



"La prueba de la necesidad de un ministerio de infraestructura son las tareas asignadas a la Vicepresidencia en este periodo de gobierno; desde allí se están coordinando trabajos de infraestructura de tres ministerios, eso debemos unificarlo en una cartera, que hoy es una necesidad para la ingeniería colombiana".

DIANA M. ESPINOSA,
Presidenta de la SCI.

El estudio no contempla a Bogotá por el tamaño de los contratos y porque la Cámara Colombiana de la Infraestructura ya venía adelantando un estudio similar y que si involucra la capital del país.

CALI

Con mejor promedio de oferentes

El tema de la contratación en la capital del Valle es de los que menos preocupa a los entes nacionales debido a que en la mayoría de los casos se presentan entre 3 y 10 ofertas para participar en los concursos de adjudicación.

No obstante, llama la atención que uno de los contratistas del Municipio, el ingeniero Fernando Castro Spadaffora, quien figura en las listas del Concejo Nacional Electoral como financiador de la campaña al senado de Roosevelt Rodríguez, el candidato de la exsenadora Dilian Francisca Toro, recibió en el 2014 millones de contratos en los que fue el único oferente.

Uno de ellos de la Secretaría de Deportes de Cali, justo cuando la titular de ese despacho era la hoy también candidata de Dilian Francisca a la Alcaldía

de Cali, Clara Luz Roldán, por un valor cercano a los \$6550 millones. El ingeniero también fue el único proponente en un contrato que por \$38.100 millones entregó la Secretaría de Educación y otro por \$11.524 millones con esa misma dependencia. Las cifras de adjudicación de obras en Cali del año 2014 muestran también dos contratos que fueron entregados a Jorge Isaac Fernández, otro de los aporantes a la campaña al Senado de Roosevelt Rodríguez, los cuales fueron adjudicados también por la Secretaría de Educación y que suman \$3700 millones siendo el de mayor valor, por \$3562 millones, adjudicado con una única propuesta económica. Analistas señalan que entre más alto el valor del contrato es lógico que haya menos oferentes.

Responde contratista

■ El ingeniero Fernando Castro Spadaffora dijo que la amistad no es pecado y que no conoce personalmente a Roosevelt Rodríguez ni ha aportado a su campaña.

■ "Si encuentran licitaciones con una oferta es porque los contratistas estamos financiando las obras del Estado porque no hay anticipos ni se pagan puntuales las actas parciales", dijo.

PALMIRA

Delgada línea entre contratos y política

Uno de los municipios con las líneas más delgadas en esa relación entre contratistas y política, de acuerdo con los resultados, es Palmira, donde en pleno año electoral les fueron adjudicados millonarios contratos a ingenieros que aportaron a las diferentes campañas. Si bien Palmira es después de Cali la ciudad que genera más confianza por el número de propuestas que se reciben en cada concurso, hay datos que se presentan para suspicacias, como lo reconoció el mismo alcalde Ritter López. Como que el ingeniero Castro Spadaffora, aportante a la campaña al Senado de Roosevelt Rodríguez, el candidato de la exsenadora Dilian Francisca Toro, recibió ese año un contrato por \$7195 millones siendo el único oferente. Al respecto Castro Spadaffora aseguró

que lleva 30 años como contratista en el Valle, con una trayectoria limpia y que jamás ha financiado candidatos a ninguna corporación. Situación similar ocurre con Holmes Zúñiga, que figura como aportante a la campaña a la Cámara de Elbert Díaz, también candidato del grupo político de Dilian y Ritter, y quien recibió dos contratos por más de \$2450 millones. Las cifras muestran que los contratistas de obra en Palmira también tienen contratos en municipios donde el grupo político de la exsenadora tiene la alcaldía; como ocurre con Hébert Palomino también en Tuluyá y El Cerrito. "No tengo información de quiénes financian campañas. En Palmira estamos tratando de hacer las cosas bien y sin favorecimientos", dijo el alcalde López.

BUENAVENTURA

Muy favorecidos

En ningún otro municipio del Valle es tan claro el favorecimiento a contratistas que han financiado campañas políticas como en Buenaventura. A juzgar por los documentos oficiales de contratación, el 2014 fue el año de saldar el respaldo a la campaña a la Cámara de Representantes de Hernán Sinisterra, el ahijado político del alcalde Bartolo Valencia. El principal músculo financiero de esa campaña fue Freddy Jesús Mosquera Obando, quien según datos del Consejo Nacional Electoral inyectó \$200 millones al equipo de Sinisterra y meses antes había recibido contratos por un valor superior a \$620 millones.

En el 2014, el contratista alcanzó por selección abreviada y concurso de méritos, siendo el único proponente, otros contratos por más de \$2580 millones. Otros dos de los ingenieros que hicieron campaña activa por la candidatura de Hernán Sinisterra a la Cámara, incluso a través de las redes sociales, fueron Jorge Eliécer Hurtado quien en concursos en los que se presentó en solitario como representante legal de la Fundación Ecológica, Rural y Urbana del Pacífico (Funerpa) logró contratos por más de \$1800 millones y Cermán Emilio Perea, a quien la Alcaldía de Buenaventura le adjudicó contratos de obra por más de \$2200 millones.

"Lo que ocurre en Buenaventura es que las personas que se encargan de preparar los pliegos de condiciones para licitaciones o concursos de méritos los direccionan de manera que solo se pueda presentar una propuesta y los que se los ganan son siempre los contratistas de la cuerda del Alcalde", aseguró uno de los ingenieros que se ha presentado a concursos en el Puerto.

Entre esos contratistas que más ganó contratos en el 2014 siendo oferentes únicos son Amira Díaz Córdoba, quien obtuvo ocho contratos por \$1680 millones; Sandro Banguera Garcés, a quien se le adjudicaron nueve contratos por un valor superior a los \$1518 millones y Roberto López Mosquera, que en solo dos contratos recibió obras por más de \$1358 millones.

Se suman a ellos Gabriel Jaime Saldarriaga, con contratos por \$1015 millones, y Henry Sánchez, con obras por \$1045 millones. El País intentó insistentemente hablar con el alcalde Bartolo Valencia pero no fue posible.

EL CERRITO

Uno solo

De los hechos que más llama la atención en el estudio de la SCI es el que se evidenció en el municipio de El Cerrito, donde el alcalde Mauricio Martínez es del Partido de la U. De los 26 contratos de selección abreviada que se celebraron en el 2014, 13 de ellos fueron entregados a Jaime Alberto Barandica Martínez por un valor superior a los \$2220 millones, quien en 10 de los casos fue el único oferente. En los otros tres casos, solo concursó contra Heberth Palomino, quien tiene varias obras en Palmira y en El Cerrito por \$540 millones.

En el Valle opera el 'yo te financio y tú me contratas'

A la hora de hablar de transparencia en la adjudicación de contratos con recursos públicos, el Valle del Cauca es una de las regiones que menos confianza genera a los organismos nacionales por la relación estrecha entre contratistas y clase política.

El estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros muestra que de las 282 licitaciones públicas, 604 selecciones abreviadas y 155 concursos de méritos que se adelantaron en los municipios del Valle en el 2014, por un valor de \$847.900 millones, más de un 92% de ellas fueron adjudicadas en concursos en los que hubo una única propuesta y en mu-

chos casos esos proponentes fueron contratistas cercanos a partidos políticos.

Cali es la única ciudad del Valle del Cauca en la que en promedio se presentaron cerca de tres propuestas para cada una de las convocatorias que se abrieron para la adjudicación de obras o la prestación de servicios.

Pero además de los casos puntuales que se detallan en las fichas anexas, hay otros municipios en los que existen serias dudas con la forma en que se direcciona la contratación.

Unos de los más llamativos es el caso del municipio de San Pedro, donde se entregaron 22 contratos de selección abreviada por \$1487 millones y los ganadores fueron, equitativamente, Fernando Quintero y Levis Andrés

Andrade, con 11 contratos cada uno.

En Bolívar las licitaciones y los contratos de selección abreviada fueron adjudicadas todos a Victoria Eugenia Ruiz sin que se presentaran más propuestas, mientras en Jamundí aseguran que contrató un hermano de Salvador Arana Sus, condenado por parapolítica y nadie lo conoce: Waldid Arana Sus.

En Yumbo el mayor contratista es el ingeniero Jaime Puerta Atehortua, quien se ganó dos licitaciones por \$2814 millones y \$2811 millones en las que no tuvo adversarios.

También en Cali y la Gobernación del Valle tiene millonarios contratos el ingeniero Christian Camilo Moreno, quien financió a Jorge Iván Ospina en la campaña al Senado.

GOBERNACIÓN DEL VALLE

Cifras aceptables

En promedio, las licitaciones que realizó en el 2014 la Gobernación del Valle del Cauca están en cifras aceptables: cerca de tres propuestas se presentaron en cada una de las 24 licitaciones públicas realizadas y que suman un total de \$91.376 millones.

El contrato más significativo del Departamento, por un valor de \$27.847 millones y aunque se presentaron tres propuestas, lo obtuvo el consorcio Unión Temporal Juanchito, que encabeza el ingeniero Jorge Eduardo Amezcua Naranjo, que también contrata en Jamundí y a quien reconocen en los círculos políticos como cercano a Roy Barreras. Sin embargo de esas 24 licitaciones hay 10 en las que hubo un único oferente. Entre ellos un contrato que se le adjudicó a un consorcio en cabeza del ingeniero Enrique Lourido Caicedo por valor de \$8302 millones.

Otro de los contratistas de la Gobernación es Christian Camilo Moreno, quien figura en la lista de personas particulares que entregó recursos para la campaña al Senado de la República del exalcalde Jorge Iván Ospina por más de \$27 millones.

Moreno hace parte de un consorcio que fue también único proponente para la licitación de obras en el departamento por \$13.447 millones y ha obtenido cuatro contratos más en Cali, dos de ellos con Secretaría de Educación.



UNIVERSIDAD LIBRE Seccional Cali

Formamos líderes, creamos futuro

CONVOCATORIA DOCENTE II-2015

Con el fin de proveer cargos de docentes en los diferentes programas de pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y de los programas de Educación, se invita a postularse.

Las hojas de vida se recibirán en la Secretaría Académica de la Facultad, del 20 al 28 de abril de 2015, de 8:00 a.m. a 12:00 m., y de 4:00 pm a 6:00 p.m.

Mayores informes y requisitos en la página web:

www.unilibrecali.edu.co

Favor abstenerse de aplicar si no cumple con los requisitos exigidos.

INFORMES: PBX: 5240007, Ext. 1103 / 1102. Diagonal 37A No. 3-29, barrio Santa Isabel, Cali.

PAPAYAZO TRIBUTARIO

Para Predial, ICA, Valorización, entre otros

80%

De descuento en intereses por mora y sanciones de vigencias 2012 y anteriores.

En caso de sanción por Resolución o Acto Administrativo, el descuento será del 50%.

Realizando su pago: HASTA 31 MAYO

Beneficios en conciliaciones contenciosas administrativas y terminación por mutuo acuerdo en procesos administrativos tributarios.

PUNTOS DE ATENCIÓN Y RECAUDO	
CAM	Centro Administrativo Municipal Plataforma 1
CAÑAVERALEJO	Av. Roosevelt con Calle 5
LA ESTACIÓN	Metrocall - Av. Vásquez Cobo #23N-59
CALIS	1,2,4,5,6,10,11,12,15,16,17,18,19 y 20

Mayor Información:

Línea 195



Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE CALI



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI